INFORME SECRETARIAL. A Despacho del señor Juez el presente trámite de insolvencia de persona natural no comerciante remitido para pronunciamiento sobre controversia y objeción. Sírvase Proveer.

Santiago de Cali, 21 de marzo de 2023.

La secretaria,

ANA MARÍA RODRÍGUEZ ROJAS

Auto No. 597

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL

Santiago de Cali, veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

I.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver las objeciones y controversias formuladas por el apoderado del acreedor CARLOS ENRIQUE TORO ARIAS, dentro del trámite de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante por él promovido.

II.- ANTECEDENTES

Dentro de los hechos relevantes a recordar dentro del trámite de insolvencia que ahora nos ocupa, se debe resaltar que fue presentada por la Señora CLAUDIA LORENA DIAZ SOTO, solicitud de inicio de trámite de insolvencia de persona natural no comerciante para conocimiento del CENTRO DE CONCILIACIÓN ALIANZA EFECTIVA.

Que por vislumbrar dicho ente el cumplimiento de todos los requisitos de ley, se admitió el enunciado trámite de insolvencia previa designación del Sr. FRANCISCO GÓMEZ en calidad de Conciliador, quien se dispuso a notificar dicha decisión a todos los acreedores relacionados por el insolvente y comunicarles la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de negociación de deudas prevista en el artículo 548 del CGP.

Fijada fecha y hora para la consumación de la audiencia de negociación de deudas, el día 16 de marzo de 2021 se abrió la misma sin que pudiese ser consumada a plenitud las etapas que para dicho acto están provistas en razón que fue aportada controversia y/o objeciones por parte del apoderado acreedor Carlos Enrique Toro, por lo que procedió el conciliador a remitir el expediente al este Juzgado para resolver las objeciones interpuestas.

Mediante Auto del 18 de marzo de 2022 se decidieron las objeciones declarándolas fundadas parcialmente frente a la falta de cumplimiento de los requisitos que debe contener la solicitud de insolvencia conforme lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 539 y numeral 3º del artículo 545 del CGP.

El 28 de junio de 2022 se lleva a cabo audiencia en la que el conciliador en

atención a lo decidido por el Juzgado 5° Civil Municipal de Cali otorga a la deudora el término de cinco días para subsanar los yerros señalados en la providencia del 18 de marzo de 2022.

El 6 de julio del mismo año se allega escrito de la deudora contentivo de la subsanación, de ahí que se programa audiencia la cual es llevada a cabo el 12 de septiembre 2022 y en la que se presenta controversia por parte del acreedor Carlos Enrique Toro.

La controversia tiene fundamento en los siguientes argumentos:

Señala que no se corrigió en debida forma la propuesta de pago, como lo ordenó el Juez 5° Civil Municipal de Cali en auto del 18 de marzo de 2022, asegurando que no es clara ni objetiva, siendo incongruente con los ingresos de la deudora.

Asegura que tiene la calidad de ser comerciante de acuerdo con el artículo 2 del Código de Comercio, indicando que es propietaria de un taxi, prestando entonces el servicio de transporte, por lo que se incurre en falta de competencia debido al tipo de trámite emprendido.

Señala que no se aportó certificado de ingresos firmado por contador público de acuerdo al numeral 6 artículo 539 del C.G.P.

Refiere que no se incluyeron la totalidad de las acreencias, que respecto del crédito hipotecario no se incluyó la suma de \$18.187.868,00 por concepto de costas procesales aprobadas dentro del proceso ejecutivo que se surtió.

Arguye que de los créditos de los señores José Edwar Guaza Zabala y Julio César Giraldo no hay ningún documento que demuestre la existencia de los mismos, por lo que colige que se trata de una simulación con la que se pretende amañar la votación de su propuesta de pago.

Afirma que en consideración a la cuantía y al concepto de lo adeudado, todo apunta a que se trata de una simulación de créditos, para diluir el porcentaje que significaría el crédito hipotecario afectando la mayoría decisoria.

III.- REPLICA FRENTE A LAS OBJECIONES

Surtido el término de traslado y haciendo uso de este, la deudora CLAUDIA LORENA DIAZ SOTO lo describió oponiéndose a la censura planteada, indicando en lo pertinente que, sí corrigió la propuesta de pago conforme lo dispuesto en providencia del 18 de marzo de 2022.

Esboza que la inconformidad con los créditos de los señores Guaza y Diaz ya se resolvió en el auto del 18 de marzo de 2022.

Argumenta que ya precluyó la oportunidad de presentar objeciones, señalando que la controversia debió presentarse en la audiencia de negociación de deudas.

Apunta que el crédito hipotecario sí fue relacionado dentro de las acreencias conforme lo prevé el artículo 2488 del Código Civil.

Respecto de la calidad de comerciante que dice el acreedor Toro ostenta la señora Diaz Soto, por ser propietaria de un taxi, reprocha que ello no fue ni objetado ni controvertido en la audiencia del 12 de septiembre de 2022 de negociación de deudas.

De igual manera, asegura que dicha afirmación respecto de la calidad de comerciante es infundada, pues solo lo colige de la propiedad de la deudora respecto de taxi.

IV.- TRAMITE PROCESAL

Como quiera que por disposición expresa del artículo 552 del C. G. del P., las objeciones deben resolverse de plano y sin advertirse la necesidad de decretar pruebas de oficio, no se adelantó trámite adicional debiendo el Despacho entrar a resolver de fondo la discusión.

V.- CONSIDERACIONES

1.- Delanteramente es menester señalar que, ha sido sostenido en diferentes providencias, que el Juez Municipal, se encuentra facultado para pronunciarse respecto las controversias suscitadas en el trámite de negociación de deudas que ante los Centros de Conciliación autorizados o Notarías se adelanten, pues como fue expuesto recientemente por el Tribunal Superior de Cali Sala de Decisión Civil en providencia del 03 de mayo de la presente anualidad, M.P. Dr. José David Corredor Espitia *“Del procedimiento de insolvencia a que hacen referencia los artículos 538 y s.s. del C.G.P., podría inferirse que el juez civil municipal únicamente conoce de las objeciones que se formulen por parte de los acreedores en el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas relacionadas con la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, no obstante y efectuando una interpretación armónica del mismo articulado, se puede concluir que el campo de acción de los jueces civiles municipales es más amplia, pues si analizamos el contenido mismo del art. 534 que prevé que el juez municipal conocerá en única instancia “de las controversias previstas en éste título...” y el parágrafo contempla “El juez que conozca de la primera de las controversias que se susciten en el trámite previsto en esta Ley, conocerá de manera privativa de todas las demás controversias que se presenten durante el trámite o ejecución del acuerdo...” (Subraya de la Sala), lo que demuestra que no solamente dichas controversias se refieren exclusivamente a las objeciones de los créditos respecto de la existencia, naturaleza y cuantía, sino que además*

podría presentarse la controversia en cuanto a la calidad de la deudora, de si cumple con los requisitos para ser considerada persona natural comerciante o no.

De igual manera, el numeral 9° del art. 17 del C.G.P. establece como competencia de los jueces civiles municipales en única instancia, “De las controversias que se susciten en los procedimientos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y de su liquidación patrimonial...”.

Atendiendo el concepto expuesto por el Tribunal Superior de Cali, entrará este juzgador a evaluar la procedencia de las controversias aquí elevadas y objeción al crédito planteada por el apoderado judicial del acreedor hipotecario, esto en razón a que en una hermenéutica amplia de los razonamientos esbozados en la precitada providencia se encuentra dentro de la órbita del Juez Civil Municipal revisar y resolver sobre cualquier controversia, si la misma no es conciliada, que se suscite dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, siendo competencia del Juzgador decidir las en cualquier momento procesal en que sean suscitadas, viéndose que la legislación así lo permite y la jurisprudencia patria así lo ha reconocido.

Así entonces, se procederá a resolver sobre la controversia formulada por el Sr. TORO ARIAS.

Sea lo primero determinar si se subsanó en debida forma la propuesta de pago presentada por la deudora.

Como se extrae del auto del 18 de marzo de 2022, la señora Diaz Soto “*debió relacionar dentro de las acreencias, la fecha de otorgamiento, cuantía, diferenciando capital e intereses, tasa de interés, vencimiento de aquellos y los documentos que los soportan (...)*”

Respecto de este punto de la subsanación allegada se evidencia que NO se incluyó por parte de la deudora la acreencia a favor del señor Toro Arias por concepto de costas procesales aprobadas dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta ante el Juzgado 3° Civil del Circuito de Cali, no obstante, es visible que en su propuesta de pago solicita la condonación de todos los intereses, honorarios de abogados y demás rubros derivados de los créditos, por lo que bien, en criterio de esta agencia judicial, debe entenderse que ahí se incluyen la costas procesales, lo cual puede ser materia de conciliación o acuerdo dentro del trámite de negociación de deudas, máxime cuando se realizó la relación de los acreedores, indicando la obligación hipotecaria (capital e intereses) y el proceso ejecutivo que se emprendió con ocasión de esta, señalando el estado en el que se encuentra dicho trámite.

Debe precisarse que a juicio de este Despacho sí se subsanó en debida forma la

propuesta de pago, debiendo entenderse que la misma es clara, expresa y objetiva al describir con periodicidad mensual la forma en la que pagaría los créditos por un lapso determinado y con el pago de sumas determinadas, lo cual atiende a la exoneración de intereses y demás rubros que persigue la deudora.

Para el caso que aquí nos ocupa, debe explicarse que respecto de sí la propuesta es clara, expresa y objetiva ni la legislación ni la jurisprudencia patria aun ha definido reglas, parámetros o lineamientos que permitan someter de manera objetiva las propuestas de pago, lo cual conlleva a que deba medirse o calificarse la misma bajo supuestos de razonabilidad y viabilidad de la misma.

El acreedor Toro Arias refiere que la propuesta de pago es inconsistente frente a los ingresos apuntando a que el punto 3 de la propuesta de pago la deudora manifiesta que pagará a los acreedores quirografarios la suma de \$7.000.000 mensuales cuando previamente en su escrito aseguró que solo disponía de \$1.600.000,00 mensuales para realizar los pagos.

De cara a este reproche basta con exponer que el planteamiento de la propuesta de pago habrá de ser sometido a votación, que es ostensible que la deudora hace una proyección de los pagos, de una manera que sí es clara, expresa y objetiva a juicio de este juzgador, sin que pueda obviarse que la propuesta de pago a los acreedores quirografarios está prevista para el año 2033, después de haber realizado los pagos de los créditos con la mayor prelación, momento en el que tendría que contar con los recursos para cubrir con tales erogaciones si es aprobada como esta la mentada propuesta de pago.

Es menester hacer pronunciamiento expreso frente al precedente jurisprudencial traído por el acreedor Toro de la providencia del 15 de mayo de 2020, la cual cita para fundamentar las supuestas irregularidades y la falta de idoneidad de la propuesta de pago.

Al respecto debe decirse que los supuestos de hecho examinados en la referida providencia son disimiles de los aquí revisados, que si bien de ahí se obtienen algunos lineamientos acerca de la competencia del Juez Civil Municipal para resolver sobre las controversias suscitadas dentro del trámite de insolvencia, de esta no se extrae en parte alguna determinaciones sobre la propuesta de pago desde la perspectiva cómo es planteada o diseñada, sino que la centralidad de la sentencia apunta a la insuficiencia patrimonial frente a las acreencias, la cual se consideraba irrisoria para solventar en algo las acreencias dentro de la liquidación patrimonial, posición que actualmente ha sido variada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL14533-2021 del 13 de octubre de 2021.

El precedente vertical a partir de ahí ha seguido el sentido de esa sentencia, el cual se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad, el cual es el de dar viabilidad a la liquidación patrimonial aun cuando los bienes del deudor son escasos

o incomparables frente a la acreencias.

Ahora, se procede a desatar los restantes puntos en los que se concretizan las controversias.

El acreedor alega que la señora Diaz Soto ostenta la calidad de comerciante, para lo cual expresa que es propietaria de un taxi, aduciendo que el monto por el que ascienden los créditos no podrían corresponder a una persona natural no comerciante.

En respuesta a lo anterior, debe explicarse que de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de Código del Comercio la calidad de comerciante la da la ocupación profesional de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles:

“ARTÍCULO 10. <COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD>. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.”

Y respecto de los actos de comercio y actividades mercantiles el Estatuto Comercial dispone:

*“Artículo 20. Actos, operaciones y empresas mercantiles – concepto
Son mercantiles para todos los efectos legales:*

1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos;

2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos;

3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés;

4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos;*

5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones;

6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos;

7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos;

- 8) *El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras;*
- 9) *La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje;*
- 10) *Las empresas de seguros y la actividad aseguradora;*
- 11) *Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados;*
- 12) *Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes;*
- 13) *Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes;*
- 14) *Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios;*
- 15) *Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;*
- 16) *Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza;*
- 17) *Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes;*
- 18) *Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y*
- 19) *Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.”*

De lo anterior, se puede elucubrar que ostentar la propiedad de un taxi no constituye una actividad que pueda ser considerada como mercantil como para atribuir a la deudora la calidad de comerciante, incluso viéndose el numeral 11 del precitado artículo, el codificado establece que el servicio de transporte es una actividad mercantil pero de manera limitada para las empresas, ni tampoco se puede encasillar a la deudora en ninguno de los otros supuestos vistos en el citado articulado.

Así pues, lo cierto es que no está acreditada la calidad de comerciante, puesto que las conjeturas a las que arriba el objetante basado en que la deudora es propietaria de un taxi y que obtuvo créditos que suman a su juicio una cantidad desproporcionada para una persona que no ejerce el comercio, no es prueba a la luz de las normativas citadas de la calidad de comerciante.

En ese orden de ideas, también se encuentra sin sustento la aseveración de falta de competencia del conciliador para adelantar el trámite de negociación de deudas propuesto por la señora Claudia Lorena Díaz Soto pues este está previsto

para personas naturales no comerciantes.

Ahora, respecto de que no se aportó por parte de la deudora certificado de ingresos suscrito por contador público para el Despacho esto no constituye una causal de inadmisión del proceso de negociación de deudas, pues si se ve lo dispuesto en el numeral 6 artículo 539 del Estatuto Procesal Vigente que reza: “6. *Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.*”, no se exige para trabajadores independiente, como ha afirmado ser la aquí deudora, la certificación de ingresos de contador público, sólo se requiere una declaración de los mismos que se entiende rendida bajo la gravedad de juramento.

Por último, el reproche respecto de las acreencia en cabeza de los señores José Edwar Guaza Zabala y Julio César Giraldo refiriéndose a que no hay ningún documento que demuestre la existencia de los mismos, por lo que colige que se trata de una simulación con la que se pretende amañar la votación de su propuesta de pago, aunado a que según su consideración, la cuantía y el concepto de lo adeudado, parece provenir de una simulación de créditos, para diluir el porcentaje que significaría el crédito hipotecario afectando la mayoría decisoria.

Debe señalar el Despacho que lo concerniente a las acreencias de los señores Guaza y Giraldo y al monto de las obligaciones de la deudora, ya fue objeto de pronunciamiento en el auto del 18 de marzo de 2022 en el cual se expuso ampliamente que no había asidero jurídico en el reproche, lo cual haría improcedente volver en este momento procesal sobre tal debate, en razón del principio de la cosa juzgada y seguridad jurídica puesto es claro que un debate como el de la presente jaez no puede retomarse de manera sempiterna, precisamente porque el goza de los efectos de la cosa juzgada, no existiendo ningún elemento novedoso, o un hecho nuevo que variara la identidad que por tres vías concurrió para que se diera la cosa juzgada de lo dispuesto en el proveído del 18 de marzo de 2022.

Y es que así lo ha definido la Corte Constitucional: “*La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.*”¹

Es claro entonces que la teleología del enunciado principio es terminar definitivamente con las controversias, y por tal motivo es inviable retomar, como se dijo líneas arriba, debates que ya han sido resueltos por la autoridad judicial.

¹ Corte Constitucional C-100 de 2019.

Finalmente, el censor presenta controversia referente al vencimiento del término de duración del procedimiento de negociación de deudas. Al respecto advierte el Despacho que, en primer lugar, le corresponde al Conciliador emitir pronunciamiento respecto del término de duración del procedimiento de negociación de deudas establecido en el artículo 544 del C.G.P:

“ARTÍCULO 544. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS. El término para llevar a cabo el procedimiento de negociación de deudas es de sesenta (60) días, contados a partir de la aceptación de la solicitud. A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias, este término podrá ser prorrogado por treinta (30) días más.”

En este sentido el artículo 559 del mismo Código establece el deber del conciliador de declarar el fracaso de la negociación, si no se celebra acuerdo de pago dentro del término de duración del procedimiento:

“ARTÍCULO 559. FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN. Si transcurrido el término previsto en el artículo 544 no se celebra el acuerdo de pago, el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial.”

Bajo este análisis, dilucida este Despacho que se hace pertinente que en consideración a que es competencia del Conciliador emitir un pronunciamiento frente al vencimiento de términos dentro del trámite de insolvencia, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, haciendo el respectivo del cómputo del término previsto en el artículo 544 del C.G.P., y en caso de encontrarlo fenecido deberá declarar el fracaso de la negociación, remitiendo las diligencias al juez civil de conocimiento, para la apertura del proceso de liquidación patrimonial.

Ahora bien, si surtido lo anterior, surge o subsiste la controversia entre las partes, deberá remitir el expediente para que el Juez resuelva lo que en derecho corresponda, ya sea dirimir la controversia o decretar la apertura de la liquidación patrimonial.

En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la controversia suscitada por el Sr. CARLOS ENRIQUE TORO ARTURO, por las razones vertidas en precedencia.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución de las diligencias de forma inmediata al CENTRO DE CONCILIACIÓN ALIANZA EFECTIVA, para que el CONCILIADOR, en el término de 10 días siguientes, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 559 del C.G.P., en el sentido de convocar a la audiencia respectiva y emitir declaración y pronunciamiento debidamente fundamentado respecto del cómputo del término de duración previsto en el artículo 544 ibídem.

En caso de suscitarse controversia o inconformidad por las partes al respecto de dicho asunto, proceda a remitir el expediente al Juez competente para revolverse o en su defecto para dar trámite a la liquidación patrimonial, teniendo en cuenta lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, por lo que una vez notificado se remitirán las diligencias de inmediato al Centro de Conciliación Alianza Efectiva (artículo 552 del C. G. del P.).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JORGE ALBERTO FAJARDO HERNÁNDEZ.
JUEZ

01

JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL
En Estado No. 51 de hoy MARZO 23 DE 2023 se
notifica a las partes el auto anterior.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ ROJAS.
Secretaria

Firmado Por:

Jorge Alberto Fajardo Hernandez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 005

Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **923b23fe6ff0a9f057e505d70d4fd94cb8a184133d59ba2e0d2ed0d316673982**

Documento generado en 22/03/2023 10:23:34 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>